



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-022-2019-00641-01
Demandante: Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez
Demandado: AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E.
Asunto: Apelación y Consulta de Sentencia
Procedencia: Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, octubre veintisiete (26) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la AFP Protección S.A. e impartir el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., respecto de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2023 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez contra la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-05-022-2019-00641-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez convocó a juicio a las AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare la ineficacia, nulidad relativa, inexistencia, inaplicación o cualquier otra figura tendiente a invalidar o dejar sin efecto el traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, declarándose válida y sin solución de continuidad la afiliación al Régimen de Prima Media; en consecuencia, se condene a Protección S.A., a trasladar Colpensiones el saldo de la cuenta de ahorro individual, bono pensional y toda suma recibida por motivo del traslado de régimen, con sus correspondientes rendimientos y sin ningún tipo de descuento y se ordene a Colpensiones convalidar el traslado.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que la señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez, estando afiliada al Régimen de Prima Media desde el 8 de enero de 1988, se trasladó al Régimen de Ahorro Individual al suscribir solicitud de vinculación a la AFP Protección S.A., el 16 de septiembre de 2002, que en la asesoría recibida por la actora de parte de Protección S.A., el tema central fue la inminente liquidación del Instituto de Seguros Sociales y la posibilidad de pensionarse a la edad que el afiliado escogiera, sin que en ningún momento hubiera recibido asesoría personalizada, en la que se le brindara información de los aspectos positivos y negativos que implicaría el traslado, ni de las variables en cada uno de los regímenes para la fijación de la mesada pensional, no existiendo asesoría suficiente, completa y clara.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada legalmente constituida, la **AFP PROTECCIÓN S.A.** aceptó que la señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez se trasladó del ISS al fondo de pensiones obligatorias administrado por la entidad, aclarando que previo a ello, se brindó una asesoría amplia, correcta, clara, comprensible, integral, profesional y suficiente sobre

todos los aspectos del Régimen de Ahorro Individual, sin omitir información e indicando las implicaciones de la decisión, además de las diferencias que existen entre los regímenes pensionales y el funcionamiento de cada uno de ellos, razón por la cual no es cierto que no se hubiera brindado asesoría personalizada, completa y suficiente.

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos del Sistema General de Pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa; inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe y la innominada o genérica.

Por su parte, **COLPENSIONES E.I.C.E.** asintió que la señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez decidió trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad con la AFP Protección S.A., sosteniendo no constarle los demás hechos, por cuanto corresponden a un tercero y se encuentran fuera del ámbito de cobertura de la entidad.

En oposición a la prosperidad de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de nulidad y/o ineficacia en el traslado de régimen; saneamiento de la nulidad relativa alegada por la parte demandante aduciendo que fue inducida en error; buena fe; prescripción; imposibilidad de condena en costas y la excepción innominada.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 29 de agosto de 2023, declaró la ineficacia del traslado de la señora Dolly

Omaira Jaramillo Rodríguez a la AFP Protección S.A. y dispuso que la parte actora ha estado vinculada sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media; condenó a la AFP Protección S.A. a trasladar a Colpensiones E.I.C.E. todos los valores de la cuenta de ahorro individual de la demandante, que incluya aportes y rendimientos, y asumir con cargo a su propio peculio y debidamente indexados, los valores de los aportes destinados a las cuotas o gastos de administración del artículo 20 de la Ley 100 de 1993; declaró no probadas las excepciones formuladas; y condenó en costas a la AFP Protección S.A.

1.4.- RECURSO

La apoderada de la **AFP Protección S.A.**, interpone recurso de apelación en lo atinente a la condena al traslado de la prima de reaseguros Fogafin, argumentando que dicho fondo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creado para enfrentar una crisis financiera que se estaba viviendo en esa época, recordando que Fogafin dentro del Sistema General de Pensiones, surge a partir del artículo 99 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011 dispuso la eliminación de la garantía del Fogafin a las administradoras de cesantías y a las pensiones del Régimen de Ahorro Individual, así como la obligación de las aseguradoras de inscribirse a Fogafin, obligando, además, al traslado de las reservas existentes al tesoro nacional, por lo que la sentencia está ordenando a Protección S.A., el traslado de un concepto que está totalmente derogado y que por disposición normativa fue girado al tesoro nacional y asumido por la propia administradora desde su estipulación en el Ley 100 de 1993, estando infundado dicho rubro objeto de condena.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión se pronunció la apoderada de **Colpensiones E.I.C.E.**, recabando en que la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual es válida por cuanto no se acreditó vicio en el consentimiento y en que la pretensora se encuentra

dentro la prohibición legal de traslado, ya que le faltan menos de 10 años para pensionarse, por lo que se deberán declarar no prosperas las pretensiones.

Agrega que, en el evento, conformarse la ineficacia de la afiliación, se debe trasladar a Colpensiones, no solo los aportes y rendimientos, sino también los recursos previstos como cuotas de administración, conforme lo expuesto en la sentencia SL17595 de 2017, además de la indexación.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por la **AFP Protección S.A.**, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad social, respectivamente.

Procede igualmente la consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez nació el 2 de mayo de 1964, según se desprende de la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 44 del anexo 04 del expediente digital.

- Que la actora se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el extinto ISS, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A., el 16 de septiembre de 2002, de conformidad con el formulario de afiliación visible a folio 47 del anexo 04 del expediente digital.
- Que la accionante acredita un total de 1460.85 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por la AFP Protección S.A., obrante a folios 35 a 50 del anexo 09 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y consulta, proferida en el presente proceso por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, determinando para tal fin, si es ineficaz el traslado efectuado por la demandante el 16 de septiembre de 2002 al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A.?

¿Si como consecuencia de la ineficacia, es procedente ordenar el traslado de las primas de reaseguros de Fogafín?

2.4.- TESIS DE LA SALA

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, es ineficaz el acto jurídico de traslado de régimen pensional por el incumplimiento del deber de información, y de forma consecuencial, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, debidamente indexados, sin que deba trasladarse suma alguna por concepto de primas de reaseguros de Fogafín; y en razón de ello, la sentencia de primera instancia será MODIFICADA y CONFIRMADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la Ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado (artículo 12).

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la Ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establece la libertad de selección de régimen como característica del Sistema General de Pensiones de la siguiente manera “... *la selección de uno cualquiera de los*

regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte de la afiliada, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley”.

A su vez, el artículo 271 ibídem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.*

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, Decreto 663 de 1993, el artículo 4° del Decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el Decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular de la afiliada, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia de la afiliación inicial o el traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021, SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022, SL1637 del 11 de mayo de 2022 y más recientemente en las sentencias, SL113 del 31 de enero de 2023, SL178 del 07 de febrero de 2023, SL397 del 01 de marzo de 2023, SL 932 del 15 de marzo de 2023 y SL1084 del 22 de marzo de 2023, entre muchas otras.

De acuerdo con la *ratio decidendi* de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual, deben aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral, esto es: i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones, y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les

traslada a las mismas la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

Descendiendo al sub judice, se tiene por establecido el traslado de la señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez, del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, a través de la AFP Protección S.A., el 16 de septiembre de 2002, según se extrae del formulario de afiliación incorporado a folio 69 del anexo 04 del expediente digital.

No obstante, el referido documento no da cuenta de la información brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Conforme al reiterado criterio de esta Sala, la simple firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos, son insuficientes para dar por demostrado el deber de información. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL932 de 2023); es por ello que del simple formulario de afiliación no puede inferirse la voluntariedad informada del traslado de régimen pensional, en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Además, del interrogatorio practicado a la demandante no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma indicó que en el año 2002 hubo una reunión general que le hicieron al personal que trabajaba en el Colegio, donde una asesora de Protección S.A., les informó dos casos concretos, primero la posibilidad de pensionarse antes de la edad y segundo, el tema que el Seguro Social se iba a terminar, como había terminado en salud y básicamente por eso tomó la decisión de firmar el formulario, sin que se le hubiera realizado exposición de ventajas y desventajas, afirmó que no le indicaron que pasaría si no reunía los requisitos para pensionarse y que no le hablaron de cuenta de ahorro individual, de devolución de saldos, ni de las modalidades pensionales.

Corolario de lo anterior, es claro para la Sala que, si bien la gestora del proceso se trasladó de forma libre y voluntaria, pues así lo indicó, ello lo hizo sin haber recibido la información clara, completa y comprensible al respecto, sin conocer las características ni el funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual, o consecuencias del traslado, ni las desventajas de dicho régimen pensional, así como tampoco conocía del Régimen de Prima Media.

Aunado a lo que se viene diciendo, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que la AFP Protección S.A., en otrora AFP Santander S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado, tal y como lo reclama el pretensor.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que la AFP Protección S.A., brindó a la demandante al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de su afiliación a dicha administradora.

De los efectos de la ineficacia del traslado de régimen pensional

La declaratoria de ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización del demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión del actor.

Y es que además, no podría afectarse el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la

cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue la AFP Protección S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación del actor, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877-2020, indicando:

“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el Régimen de Prima Media. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

Similar postura se sostuvo más recientemente en la sentencia SL 1084 de 2023, al sostener:

“De igual modo, dicha entidad deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración, comisiones y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, pues estos

conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones (CSJ SL3465-2022, CSJ SL2229-2022 y CSJ SL3188-2022)”.

De manera particular, se relieves que los rendimientos financieros generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por la afiliada, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

En cuanto a las primas de los seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Adicionalmente, cumple memorar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adocinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP, es un efecto inherente a la

declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones E.I.C.E., Razón por la cual resulta procedente la condena por este concepto, tal y como lo ordenó el *a quo*.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia será MODIFICADA en el sentido de precisar, que los gastos de administración del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que deben ser trasladados al Régimen de Prima Media, comprenden las comisiones de administración, las primas del seguro previsional, y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal y como fue razonado por el cognoscente de primera instancia en la parte motiva de la sentencia

Se resuelve, de contera, en forma favorable el disenso del alzado, respecto al traslado de las primas de reaseguro Fogafin a cargo de las administradoras de pensiones del Régimen de Ahorro Individual, a las cuales hizo alusión el *a quo* en la parte motiva, advirtiendo que no hay lugar a revocar la decisión, porque, aunque no hay duda que tal garantía fue derogada por el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011, la parte resolutive la sentencia primigenia, no dispuso su devolución.

Sin costas en esta instancia atendiendo a la prosperidad del recurso de alzada y por haberse revisado el fallo de primera instancia bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E.

3.- DECISIÓN

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2023 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso

ordinario laboral instaurado por la señora Dolly Omaira Jaramillo Rodríguez contra la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., en el sentido de precisar que los gastos de administración previstos en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que deben ser trasladados comprenden las comisiones de administración, las primas del seguro previsional, y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

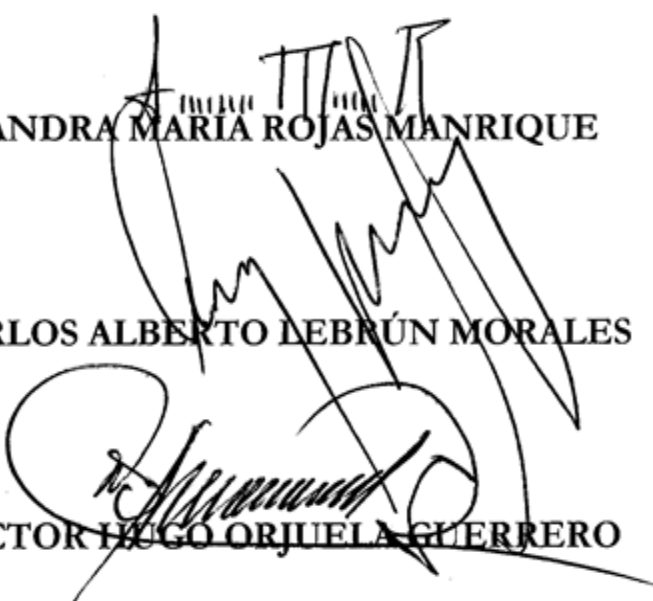
2.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

3.- Sin costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO